



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)

| | |
|-------------|-----------------------------|
| REFERENCIA: | PROCESO ORDINARIO LABORAL |
| ASUNTO: | APELACIÓN DE SENTENCIA |
| DEMANDANTE: | JOSÉ MANUEL ROMERO ALFONSO |
| DEMANDADOS: | TEXTRON S.A |
| RADICADO: | 050013105 002 2013 00629 02 |
| ACTA No | 54 |

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada en el proceso promovido por **JOSÉ MANUEL ROMERO ALFONSO** en contra de **TEXTRON S.A.**

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 54** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

El demandante pretende que se condene al pago de la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización moratoria del artículo 65 del CST por la tardanza en el pago de la liquidación final de prestaciones sociales, costas y agencias en derecho¹.

Para sustentar sus pretensiones afirmó que entre las partes existió una relación laboral y fue despedido sin justa causa el 24 de abril de 2013 con fundamento en hechos inexistentes y falsas imputaciones, faltándole 209 días para finalizar la quinta prórroga. Y que la sociedad canceló de manera tardía el pago de sus salarios y prestaciones sociales sin justificación alguna, obrando de mala fe.

¹ Páginas 3 a 8 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folios 3 a 8. Demanda presentada el 28 de mayo de 2013.

1.2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA²

TEXTRON S.A se opuso a las pretensiones señalando, en síntesis: **i)** El contrato de trabajo finalizó por causa imputable al trabajador, por actuaciones inaceptables de violencia, injuria y malos tratamientos con un subalterno al que le ocasionó lesiones físicas en los sucesos del 13 de marzo de 2012 que fueron confesados y aceptados. Señala que la terminación se dio conforme al procedimiento legal (CST en el artículo 62, literal A, numerales 2, 5 y 6; artículo 58 en los numerales 1, 4 y 5) y reglamentario establecido (artículo 43 en los numerales 1, 4 y 5), dándosele la oportunidad de ser oído. **ii)** Al momento de la terminación del contrato el señor ROMERO ALFONSO no se encontraba a paz y salvo con la empresa, por el pago de \$2.247.750 a un proveedor –AIRE Y CONFORT- que no tiene soportes, lo que le generó perjuicios por el cobro jurídico que éste adelanta en contra de la sociedad; sin embargo, ésta efectuó el pago completo de la liquidación de prestaciones sociales actuando de buena fe.

Propuso como excepciones de mérito COBRO DE LO NO DEBIDO, INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES, PAGO, COMPENSACIÓN, PRESCRIPCIÓN Y BUENA FE.

1.3. LA SENTENCIA

En audiencia pública del **24 de abril de 2015** la A quo tomó las siguientes decisiones: DECLARÓ que entre las partes existió un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año del 23 de noviembre de 2010 al 24 de abril 2013 que terminó en forma injusta. CONDENÓ a TEXTRON S.A. a pagar las siguientes sumas: **\$20.799.844 por concepto de INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO y \$2.332.692 por INDEMNIZACIÓN MORATORIA**. Absolvió al empleador de las demás pretensiones y lo condenó en costas.

1.4. EL RECURSO DE APELACIÓN DE TEXTRÓN S.A

Inconforme con la decisión, el apoderado de **TEXTRÓN S.A** interpuso recurso de apelación concretando su inconformidad en relación con los siguientes aspectos: **i) Sobre la condena a la indemnización por despido sin justa causa. a)** Deben valorarse las pruebas de manera conjunta y darle validez al Reglamento Interno de Trabajo. El trabajador no justificó la cancelación del dinero al proveedor por lo que hay un cobro jurídico en contra de la empresa. La conciliación ante la fiscalía no puede tenerse como una confesión de que AGUIRRE fuese el agresor, pues es claro que ambos incurrieron en actos de violencia que dieron lugar a la terminación del contrato de trabajo. **b)** Sobre los faltantes aducidos también como justa causa, indicó que debe valorarse el interrogatorio de parte del actor en lo que va en detrimento de sus intereses, siendo

² Páginas 55 a 63 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folios 45 a 53.

claro que el señor JOSÉ MANUEL conocía de ellos lo que debió informar de manera diligente, por ser parte de sus funciones. El demandante confesó el conocimiento de las irregularidades presentadas por AGUIRRE. **ii) Sobre la condena a indemnización moratoria. a)** En el plenario no se demostró mala fe del empleador y señala que 24 días no es un término exagerado, teniendo en cuenta el faltante y el cobro jurídico adelantado en contra de la empresa. No hay mala fe porque no se descontó el faltante por valor de \$2.247.750 y al pretensor se le cancelaron las prestaciones. **b)** Subsidiariamente, estima que debe tenerse en cuenta el año comercial en laboral, pues la fundamentación de la Juez es aislada y se aparta de la postura de la CSJ que ha reiterado que el conteo de días para el reconocimiento de las prestaciones es de treinta (30), por lo que solicita se reliquide el valor de la condena.

2. DEL TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA

Con auto de **11 de noviembre de 2020** se admitió el recurso y se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión³. La demandada se abstuvo de intervenir.

El apoderado del demandante solicita la **confirmación** de la sentencia de primera instancia argumentando: **i)** La terminación del contrato de trabajo se dio sin justa causa y no existe justificación de la mora en la cancelación de salarios y prestaciones a la finalización de la relación laboral. No se logró demostrar que el actor hubiese desplegado actividades contrarias a sus funciones ni que hubiese agredido a un compañero o subalterno, la agresión de la que hay prueba es en contra de JOSÉ MANUEL, de quien los testigos dieron buenas referencias sobre el trato con sus subalternos y el cumplimiento de sus funciones. **ii)** Es claro que no hubo acto lesivo por parte del demandante, no se le podía despedir bajo esos supuestos sin escucharlo y darle credibilidad a sus manifestaciones. Del actor no presumieron su buena fe en cumplimiento de sus obligaciones laborales ni establecieron mecanismos de protección ante estas contingencias dentro del horario laboral, terminando el contrato en detrimento de su expectativa de vida en una ciudad diferente a la de su residencia e irrespetando el principio de estabilidad en el empleo, causándole perjuicios.

Pues bien, la Sala es competente para conocer del proceso en virtud del recurso de apelación interpuesto por **TEXTRÓN S.A.** Así, el análisis se contrae a determinar lo siguiente: ¿Se acreditó por el empleador la existencia de una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo el **23 de abril de 2013**? ¿Acreditó **TEXTRÓN S.A.** los

³ PDF 07 de la carpeta de segunda instancia del expediente digital.

argumentos para efectuar el pago de la liquidación de prestaciones sociales el **17 de mayo de 2013**?

3. LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SE SUSTENTA EN UNA JUSTA CAUSA DEBIDAMENTE ACREDITADA

En este proceso no es objeto de discusión que el contrato de trabajo terminó con comunicación del **23 de abril de 2013⁴** en la que el empleador sustenta la terminación en dos situaciones: **i)** Una pelea que se presentó el 13 de marzo anterior dentro de las instalaciones de la empresa y dentro de la jornada de trabajo con un subalterno y compañero de trabajo, FERNANDO AGUIRRE. Se aduce que se trata de un hecho que reviste la mayor gravedad, pues según las versiones, pruebas y documentos presentados por el señor AGUIRRE, el demandante le propinó golpe en el rostro que le originaron unas lesiones personales con incapacidad de 5 días otorgada por Medicina Legal. Y se afirma que resulta totalmente inaceptable que el actor, como superior jerárquico, se hubiere transado en una riña con tan nefastos resultados para cada una de las partes, constituyendo un grave acto de indisciplina, un mal ejemplo para sus compañeros y subalternos, y un grave incumplimiento de sus obligaciones legales, invocando el **artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 literal A numeral 2.** **ii)** Porque acepta en el acta descargos "otra serie de hechos gravísimos" que se transcriben en la misiva. Y se aduce que en su condición de DIRECTOR DE ZONA ha debido impedir que el señor AGUIRRE cometiera tan graves actos que van en perjuicio de la compañía, que implican el incumplimiento y desconocimiento de las normas y procedimientos del almacén y dan cuenta de un actuar negligente e irresponsable. Se afirma que sus conductas constituyen una grave violación de sus obligaciones legales, contractuales y reglamentarias, de manera especial las consagradas en el **artículo 58 del CST numerales 1,4,5 y el artículo 62 del CST literal A numerales 1,2,5 y 6**

Para proferir la condena a la indemnización por despido sin justa causa, la A quo razonó de este modo: **i) Respecto a la primera conducta invocada en la carta despido señala:**
a) No hay duda de la agresión, **pero que las causales invocadas en la carta de despido son diferentes a las expuestas por el empleador para su defensa en este proceso.** No es pertinente analizar el Reglamento Interno de Trabajo al estar desprovisto de la aprobación por parte del Ministerio de Trabajo. **b)** Antes del despido el demandante y el trabajador FERNANDO AGUIRRE ESCUDERO llegaron a un acuerdo según el cual el segundo cancelaba al actor una suma de dinero como compensación de los daños

⁴ Archivo 01 EXPEDIENTE ESCANEADO – Página 31 -32

sufridos, asumiendo la responsabilidad y quedando demostrado que no fue el demandante quien incitó los golpes. Así, consideró que, contrario a lo afirmado por el apoderado de la sociedad, es importante indagar sobre la conducta imputada al trabajador que debe ser grave, debiéndose analizar el grado de participación, señalando que conforme la prueba testimonial se trató de un hecho aislado, siendo el actor una persona respetuosa lejos de ser hostil o conflictivo. Invocando sentencia de la Sala de Casación Laboral con Radicado 34935 de 2009 adujo que el evento no se puede alegar como justa causa de despido, resaltando que la empresa no individualizó al agresor, y no existen pruebas de actitudes de parte del señor ROMERO que permitan atribuirle responsabilidad de los hechos, desprendiéndose de la conciliación efectuada entre las partes que no fue él el agresor. **ii)** Sobre la segunda motivación para el despido, destaca que el empleador no dio cuenta en qué momento el actor conoció de los faltantes, no fue citado a descargos por tal situación y al vulnerar el debido proceso, no es procedente su valoración

Para efectuar el análisis, debe partirse del análisis de las pruebas recaudadas en el proceso, veamos:

- Obra el Formato único de noticia criminal del **13 de marzo de 2013**⁵, en el que funge como **denunciante JOSÉ MANUEL ROMERO ALFONSO** en la que se narra que FERNANDO AGUIRRE ante un reclamo que se le hizo comenzó a agredir verbalmente al actor, posteriormente le lanzó una horma metálica con la que le lesionó el pie derecho y luego le dio una patada con la que le afectó un diente. Y según el Informe Técnico Médico Legal de Lesiones no fatales de la misma fecha, el señor ROMERO ALFONSO expresó que un trabajador suyo lo había agredido con un metal y una patada. Se concluyó una incapacidad definitiva de 8 días, sin secuelas médico legales⁶. También se acredita que al señor JOSÉ MANUEL ROMERO le fue dictaminada incapacidad médica general por accidente de trabajo con una duración de 5 días, del 19 al 23 de marzo de 2013⁷. Y se allegan unas fotografías que dan cuenta de las lesiones por él sufridas en el rostro y pie⁸.
- También se allegó Formato único de noticia criminal en la que es **denunciante el señor FERNANDO AGUIRRE**⁹, en la que narra que ambos se agredieron verbal y físicamente. Refiere que, tras el puño recibido por parte de JOSÉ MANUEL ROMERO, comenzó a corretearlo para pegarle y ROMERO se cayó. Y según el Informe Técnico

⁵ Páginas 19 a 22 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folios 14 a 17.

⁶ Página 23 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folio 18.

⁷ Páginas 26 a 30 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folios 21 a 25.

⁸ Páginas 33 a 35 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folios 28 a 30

⁹ Páginas 126 a 128 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folios 108 a 110.

Médico Legal el señor FERNANDO AGUIRRE ESCUDERO presentaba zumbido en los oídos, dolor de cabeza evidenciándose la membrana timpánica perforada en la zona posterior. Se concluyó una incapacidad legal provisional de 5 días¹⁰. Con la Historia clínica se demuestra la afectación en el oído derecho¹¹.

- Según acta de conciliación con acuerdo celebrada ante el Fiscal 83 Local de Medellín el 22 de abril de 2013 ¹² el querellante ROMERO ALFONSO solicitó se le cancelara la suma de un millón de pesos, el señor FERNANDO AGUIRRE ofreció la doscientos mil pesos, y después de un amplio diálogo entre las partes llegaron a un acuerdo por esta última cifra.
- De otro lado, se allegaron al plenario las actas de descargos realizados por la empresa a los dos trabajadores, así:

En diligencia del **22 de marzo de 2013** el señor **FERNANDO AGUIRRE ESCUDERO** acepta que tuvo una riña con el señor ROMERO el 13 de marzo anterior dentro del local 2273 del Centro Comercial Santa Fe. El declarante aduce que el señor ROMERO se refirió a él de forma no adecuada sobre la situación laboral suya y que debía hablar con su señora e hija. Expresó en su momento:¹³

"Seguidamente me acerco más al señor Romero y el reacciono (sic) pegándome un puño en la cara y el oído del lado derecho, también me daña las gafas que tenía puestas (lente del ojo derecho) y yo reacciono pegándole en la cara o en la boca lo cual no recuerdo exactamente, seguidamente le solicito al señor Romero que se salga del almacén y es cuando el señor Romero se tropieza con un mueble del almacén y se cae, el señor Romero se para y se retira del almacén y yo me ofuscó (sic) y reaccioné de la siguiente forma, Salí del almacén, lo cerré y se (sic) fui detrás de él y cuando yo bajaba me encuentro con Gloria Ocampo quien ese día me apoyaría como reemplazo porque Diana Daza Ortiz estaba de descanso. Ella me llama y yo le entrego las llaves del almacén para que realizar (sic) la apertura, sigo detrás del señor Romero y llego al almacén de Oviedo y me dirigí al señor Romero diciendo que me había pegado en la cara y que esto (sic) se quedaría así. Que le iba a poner una demanda y me fui para mi casa."

Confiesa que agredió al señor JOSÉ MANUEL ROMERO con un puño en la cara y parte de la boca, que presentó denuncia en contra del señor ROMERO por lesiones personales y que se dirigió a Medicina Legal el 15 de marzo donde fue incapacitado por 5 días por la lesión en el oído derecho por el golpe recibido.

¹⁰ Página 129 PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folio 111.

¹¹ Páginas 131 a 134 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folios 113 a 116.

¹² Páginas 24 y 25 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folios 19 y 20.

¹³ **Páginas 123 a 125** del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folios 104 a 107.

Posteriormente, en diligencia del **3 de abril de 2013** el señor JOSÉ MANUEL acepta que tuvo un “inconveniente de tipo laboral basado en la inconsistencia de los inventarios” a cargo del señor FERNANDO AGUIRRE, que se presentó en horas laborales y dentro del establecimiento comercial¹⁴. Narra:

“[...] A mi reclamo el señor Aguirre de inmediato se exalto (sic) lanzando palabras fuertes en mi contra y de la compañía, a lo que le pedí respeto y control ya que en un acto airado se quito (sic) sus gafas y las estrello (sic) contra el piso, gritando que si otra vez le iban a meter la mano al bolsillo de su nómina, nuevamente le dije que se calmara y él siguió agrediéndome verbalmente, diciendo que yo era un patronalista HP. Ya viéndolo más agresivo le recomendé que se retirara si estaba tan inconforme y él me dijo que si quería que lo echara a lo que dije Fernando cálmese, consulte antes con su familia y retírese. Estas palabras fueron el detonante para que iniciara la agresión física, cogiendo a golpes la impresora y a patadas la CPU, de inmediato me le aproxime (sic) para impedir el daño de estos elementos, él en su reacción cogió la horma con el zapato e intento (sic) lanzármela a la cara, mi reacción fue de protección y lo empujé hacia atrás y el me lanzó y me cayó en el pie derecho, al sentir dolor me agache (sic) y me dio una patada en la cara, al ver esto me asusté de ver su comportamiento y me retire (sic) del almacén y salí para el almacén de Oviedo, al ingresar el administrador Juan Guillermo Lotero de Oviedo, se alerto (sic) al verme en esas condiciones y extrañado me preguntó qué me había pasado, le comente el incidente con el señor Aguirre y en ese momento el señor Aguirre llevo (sic) a esta tienda a seguir con sus agresiones, lanzando amenazas en mi contra, a lo que intervino el señor Lotero diciéndole que se saliera de la tienda y él se retiró”.

También indica que al ver la reacción del señor AGUIRRE pudo haber subido el tono de voz por la preocupación sobre el tema, pues en los dos inventarios anteriores aquel no asumió la responsabilidad y no firmó los documentos de los auditores. Afirma que no incurrió en ofensas y que lo trató en términos normales, que lo que hubo fue una respuesta de protección empujándolo para evitar que le lanzara un objeto en la cara, desmiente haberle pegado un puño a FERNANDO AGUIRRE.

En el **interrogatorio de parte** absuelto por el señor JOSÉ MANUEL ROMERO, manifestó que concilió con el señor ROMERO por los hechos sucedidos el 13 de marzo de 2013 ante la Fiscalía, que lo que sucedido no fue una riña y así debió quedar en el acta de descargos. Explicó cómo sucedieron los hechos y que le hizo el reclamo AGUIRRE por unas irregularidades del manejo del almacén, que no golpeó al señor AGUIRRE sino que se trató de un acto de defensa para evitar que no lo lesionara con una horma de zapato y dice desconocer el motivo de incapacidad de FERNANDO AGUIRRE puesto que no hubo contacto de su parte con golpes.

¹⁴ Páginas 145 a 146 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folios 127 a 130.

El testigo **ALBERTO OLIVER RESTREPO** manifestó que no estaba presente el día 13 de marzo de 2013 en la discusión de ROMERO y AGUIRRE. Menciona que acompañó al demandante a interponer la denuncia ante la Fiscalía por las lesiones personales causadas por el compañero. Indica que se encontraba en el almacén de Oviedo y su compañero le dijo que había llegado FERNANDO AGUIRRE detrás de JOSÉ MANUEL ROMERO con ganas de formar una pelea dentro del almacén e indica que le solicitó a FERNANDO que se retirara. Sostiene que vio llegar a JOSÉ MANUEL con lesiones en la cara y el pie, tenía un labio inflamado y un tobillo lesionado, pero desconoce si FERNANDO agredió a ROMERO.

El testigo **CARLOS MARIO FLOREZ ARBOLEDA** también informó que no estaba presente en el altercado, se encontraba en el almacén del Tesoro. Manifiesta que por comentarios entre los compañeros sabe que AGUIRRE fue a un centro médico por una dolencia en un oído producto de un golpe propiciado por JOSÉ MANUEL. Que las versiones eran diferentes y que AGUIRRE contó que el primer golpe lo recibió él por parte de JOSÉ MANUEL, en virtud de ello fue incapacitado e instauró denuncia por agresión; indica que cuando vio a AGUIRRE unos días más tarde, este no presentaba signos de agresión física.

El testigo **RICARDO GALVIS TORRES** como Director de Recursos Humanos manifestó que al rendir descargos el demandante narró que la pelea se dio por unos manejos inadecuados por parte del administrador AGUIRRE que eran continuos, los cuales desconocía la empresa y sabe que los dos se presentaron ante Medicina Legal.

Pues bien, analizando el acervo probatorio en su conjunto a la luz de lo previsto en el **artículo 61** del Código Procesal del Trabajo, los principios científicos que informan la crítica de la prueba, a juicio de esta corporación se impone revocar la decisión de condenar al pago de la indemnización por despido injusto, al encontrar acreditada una justa de causa de despido.

En efecto, en el **artículo 62** del Código Sustantivo de Trabajo modificado por el **artículo 7o. del Decreto 2351 de 1965**, al consagrar las justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo se dispone en el **literal A** por parte del Empleador:

[...]

2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo.

[...]

En relación con esta causal se ha pronunciado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia con **Radicado 34935 del 1 de julio de 2009**, adoctrinando con claridad que una riña entre compañeros comporta indudablemente un acto de violencia y de grave indisciplina de manera que ante la existencia objetiva del hecho se enerva la justa causa de despido. Así, al trabajador le corresponde demostrar con suficiencia que fue él la víctima de la agresión. En otras palabras, puede el empleador proceder al despido, que será justo, a no ser que quien aspire a la indemnización acredite ante el Juez que fue la otra persona la que dio origen a la contienda.

[...] Se parte, entonces, de la base de que es verdad sabida y aceptada que la causal esgrimida por el empleador corresponde a la descrita en la norma aludida, y además, que el accionante participó en la riña con un compañero de trabajo.

Desde la anterior perspectiva, a juicio de la Sala no fue equivocada la exégesis que el Tribunal imprimió a la norma mencionada, pues esta señala tal conducta como justa causa para que el empleador termine unilateralmente el contrato, según se desprende de su tenor literal: "Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo.";

Es claro el precepto reproducido en considerar como causa de despido la sola ocurrencia de cualquiera de las conductas que describe; sin embargo, estima la Corte que, ante la ocurrencia de alguna de las hipótesis allí contempladas, **el aspecto subjetivo cobra importancia, como elemento definitorio exculpatorio, sólo en cuanto estuviere probado que no fue el trabajador despedido quien dio lugar al acto de violencia**, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina.

De este modo, resulta obvio anotar que una **riña entre compañeros, comporta indudablemente un acto de violencia y de grave indisciplina**, por lo que, cuando objetivamente ella se presenta, es decir, **cuando existe plena evidencia de la participación de dos trabajadores en una riña**, como la que se suscitó entre el demandante y Vargas González, **si uno de ellos pretende exonerarse de los efectos que su comportamiento acarrea, debe demostrar con suficiencia que fue él la víctima de la agresión**. Ello es así, porque, **ante la existencia objetiva del hecho que configura la falta**, en principio, y según las circunstancias que rodeen cada caso, **puede el empleador proceder al despido, que será justo**, a no ser que quien aspire a la indemnización **acredite ante el Juez que fue la otra persona la que dio origen a la contienda**.

En ese orden, no se equivocó el Tribunal en la intelección de la norma legal mencionada, ni distorsionó el genuino sentido que correspondía darle, en los términos expuestos, toda vez que, aunque no profundizó en su análisis, los hechos y las pruebas que analizó lo condujeron a concluir que esa riña, por sí sola configuraba causal de despido al tenor de lo previsto en la norma copiada.

(Negrita propia)

Se trata de un criterio jurisprudencial reiterado en la sentencia **SL 2850 de 2020**, oportunidad en la que la Alta Corporación encontró ajustada la condena a la indemnización por despido sin justa causa al haberse acreditado que no se había presentado una reacción violenta por parte del trabajador, pues se trató de una reacción instintiva y natural en una situación en la que el actor no inició el altercado,

por lo que el elemento subjetivo exigido en el ordenamiento para justificar el despido, lo exculpaban de la terminación del contrato. Y en la sentencia **SL 1114 de 2021**, encontró justificado el despido con base en esta causal, al no encontrar probado que se hubiese presentado el elemento subjetivo exculpatario del que habla la jurisprudencia, para concluir que ante la existencia objetiva del hecho que da lugar a la falta grave, el empleador podía proceder al despido invocando la justa causa.

Así, en criterio de esta corporación no existe duda que el **13 de marzo de 2013** el demandante incurrió en **actos de violencia y grave indisciplina en sus labores** con el compañero de trabajo. La descripción que cada uno de ellos realiza en la diligencia de descargos y en Fiscalía da cuenta de ello, haciendo referencia a puños, palabras fuertes y agresiones verbales y físicas, empujones, patadas y amenazas dentro de las instalaciones de la empresa y durante la jornada laboral. Incluso se ha demostrado que con ocasión de esa riña, JOSÉ MANUEL ROMERO y FERNANDO AGUIRRE presentaron lesiones personales que fueron detalladas en el Informe Técnico Médico Legal realizado a cada uno, acreditándose de este modo la existencia del hecho objetivo que configura la falta consagrada en el numeral 2 del literal A del artículo **62** del Código Sustantivo de Trabajo modificado por el **artículo 7o. del Decreto 2351 de 1965**.

Y si bien el actor adujo en los descargos ante el empleador el **3 de abril de 2013** que sus reacciones fueron de protección y en el interrogatorio de parte explicó que lo que sucedido no fue una riña, que se actuar se trató de un acto de defensa para evitar ser lesionado; tales afirmaciones no encuentran respaldo probatorio en el proceso. No existe prueba alguna con la que compruebe que fue el compañero de trabajo FERNANDO AGUIRRE quien dio origen a la contienda, o que el actuar de JOSÉ MANUEL ROMERO hubiese obedecido a una defensa natural como lo indica.

Así, contrario a lo concluido por la A quo en la providencia que se revisa, las pruebas del proceso en manera alguna permiten concluir que el proceder del empleador constituya un despido sin justa causa. No basta que los testigos traídos a juicio califiquen al actor como una persona respetuosa y amable para así entender la situación como un hecho aislado y exculparlo. Los testigos del proceso no presenciaron lo ocurrido, lo que relatan sobre lo ocurrido no les consta y las versiones de AGUIRRE y ROMERO se contradicen sobre aspectos relevantes para el análisis, concretamente sobre quién inició la agresión, cuáles fueron los golpes que se dirigieron uno a otro. Y en relación con el acuerdo al que se llegó ante el Fiscal 83 Local de Medellín el 22 de abril de 2013, oportunidad en la que FERNANDO AGUIRRE aceptó realizar el pago de \$1.000.000

tampoco constituye una manifestación de su responsabilidad o que el hoy demandante fuese **la víctima de la agresión**; siendo claro además, que ambos formularon denuncia penal recíprocamente. Es de señalar que la conciliación pre procesal en materia penal es un requisito de procedibilidad en los delitos querellables¹⁵, siendo este un espacio en el que las partes concurren para considerar sus necesidades e intereses, en aras de favorecer una solución racional, lógica y satisfactoria que ponga fin al conflicto y evite el desgaste del aparato judicial; sin que de ella pueda desprenderse una confesión o la aceptación de responsabilidad de los daños que se concilian, pues el legislador no le ha dado tal alcance. Incluso, la misma acta de conciliación del acuerdo expone¹⁶:

"...el Fiscal procedió a enterar a las partes del objeto de la misma, haciéndole saber la metodología de la diligencia, así como los derechos y deberes que les asiste, principalmente que de todo lo que se diga en esta audiencia, o la voluntad del citado para conciliar, no podrá ser usado como evidencia de responsabilidad."

En conclusión, con esta sola conducta se encuentra configurada una justa causa de despido al comportar la riña entre compañeros un acto de violencia y de grave indisciplina, existiendo plena evidencia de la participación de los dos trabajadores y sin que se hubiese demostrado con suficiencia por el demandante que el agresor hubiese sido su compañero FERNANDO AGUIRRE. Se revocará en este aspecto la providencia que se revisa para en su lugar, **ABSOLVER a TEXTRON S.A** por este concepto.

4. LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 65 DEL CST

En la sentencia se condenó a la sociedad a pagar la suma de **\$2.332.692** por concepto de INDEMNIZACIÓN MORATORIA, pues tras analizar los argumentos esbozados por la sociedad consideró que el empleador no puede retener el pago de la liquidación de prestaciones sociales argumentando que el trabajador no está a paz y salvo.

En efecto, sobre el pago tardío de la liquidación de prestaciones sociales, se expuso en la contestación de la demanda que el actor no se encontraba a paz y salvo al momento de la terminación del vínculo contractual porque debía el pago a un proveedor que no se registró y del cual no existían soportes, señalando que ello le generó perjuicios en virtud de un cobro jurídico que se adelantó en su contra.

Y en el recurso se insiste en que no se demostró la mala fe, que la norma no estipula un término para cancelar las prestaciones, que el tiempo de tardanza no fue exagerado

¹⁵ Artículo 522 del Código de Procedimiento penal.

¹⁶ Páginas 24 y 25 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folios 19 y 20.

porque hay medios de prueba que demuestran el faltante en las cuentas de la empresa y un cobro jurídico por un proveedor que debió ser pagado por el actor. recaba que el empleador actuó de buena fe al no descontar al actor los \$2.247.750 que aparecen como faltantes en la empresa.

Pues bien, en este caso no se discute que el empleador pagó la liquidación de prestaciones sociales al señor ROMERO por valor de **\$4.568.002**¹⁷, hecho que el actor confesó al absolver el interrogatorio de parte. El pago de este monto fue realizado el **17 de mayo de 2013**, tal como se afirma en la contestación acreditándose con la documental¹⁸. Y de acuerdo con el **artículo 65** del Código Sustantivo del Trabajo, se causa la INDEMNIZACION POR FALTA DE PAGO si **a la terminación del contrato**, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes (**Sentencia C-079-99**).

Teniendo claro lo anterior, pasará a estudiarse la tesis planteada por el empleador para sustentar las razones de la tardanza en el pago, para lo que se encuentran las siguientes pruebas:

- Un comprobante de egreso del 26 de octubre de 2012, en el que aparece como "valor del cheque" la suma de **\$2.362.950**; con una consignación fechada del 26 de octubre de 2012 por valor de **\$2.247.750** a nombre de JOSÉ MANUEL ROMERO¹⁹.
- Una carta de GESINCO ABOGADOS S.A. fechada de 26 de agosto de 2013, dirigida a TEXTRON S.A en la que se expone que AIRE Y CONFORT LTDA les confirió poder para adelantar el cobro pre jurídico o jurídico de la obligación que tiene vencida. En la misma comunicación se señala que los valores a cancelar son \$2.317.680 por concepto de capital, \$115.884 de intereses y \$486.712 de gastos de cobranza, para un total de \$2.920.276²⁰

Con estos documentos no se demuestran las razones esbozadas por la defensa. En primer lugar, en el comprobante de egreso no aparece que la suma girada al señor JOSÉ MANUEL ROMERO fuese para pagar al proveedor AIRE Y CONFORT, no es claro por qué si el valor del cheque es de **\$2.362.950**, el comprobante de consignación refleje la suma de **\$2.247.750** con una diferencia de **\$115.200**.

¹⁷ Página 72 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia, folio 62.

¹⁸ Página 147 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia, folio 131.

¹⁹ Página 93 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia, folio 73.

²⁰ Página 94 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia, folio 74.

Al absolver el interrogatorio de parte el actor no efectuó confesión alguna referida a que no hubiese realizado el pago al proveedor como lo pretende hacer ver el apoderado de la sociedad. Expresó que conoció de este asunto después de haber sido despedido y solo reconoció que a su cuenta fue girada la suma de **\$2.247.750** como en muchas otras ocasiones se había hecho para hacer trámites como Director de la Zona Medellín, explicando que cada que se le giraban dineros, la Tesorera Johana Ariza exigía los soportes en un término menor a 24 horas para hacerle seguimiento, los que se enviaban por correo a la oficina en Bogotá. La demandada no aportó pruebas que dieran cuenta de la irregularidad que aduce, allegando unos soportes fechados en octubre de 2012, para justificar el incumplimiento de una obligación laboral que se causó 5 meses después, a la terminación del contrato de trabajo (artículo 65 del CST) el **23 de abril de 2013²¹**.

De otro lado, el documento de cobro pre jurídico no otorga claridad sobre la obligación objeto de recaudo ni la fecha de exigibilidad. Lo que se advierte es que se trata de un cobro que se inició en contra de la sociedad cuando habían transcurrido más de cuatro (4) meses desde la terminación del contrato y casi tres (3) meses después de que se hubiese efectuado el pago de las prestaciones sociales al actor. Aunado a lo anterior, se trata del cobro por un de **\$2.317.680**, suma que tampoco coincide con las cifras del comprobante de egreso y la consignación del 26 de octubre de 2012.

Así pues, la Sala comparte el razonamiento efectuado en la providencia que se revisa, pues la tesis planteada por la sociedad no encuentra respaldo probatorio en el plenario por lo que se **CONFIRMARÁ** esta condena, cuyo valor se encuentra ajustado a derecho pues al efectuar la operación aritmética se advierte que esta corresponde al tiempo transcurrido entre el 24 de abril y el 17 de mayo de 2013. Y al verificar la fecha en que debió efectuarse tal pago se **ADICIONARÁ** la providencia porque se trata de una suma que se encuentra afectada por la devaluación de la moneda, derivada de una economía inflacionaria como la nuestra, siendo claro que ello no implica en manera alguna el incremento del valor del crédito, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, lo que garantiza es que éste crédito no pierda su valor real. Así, se impone proferir una

²¹ Archivo 01 EXPEDIENTE ESCANEADO – Página 31 -32

condena que ponga al demandante en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el **artículo 16 de la Ley 446 de 1998** según el cual «dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales». Y la forma en que aquello se garantiza en el marco de la protección especial de los derechos laborales y de la seguridad social, es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda (**SL 359 -2021**).

Así se ordenará a **TEXTRON S.A** calcularla de acuerdo con la siguiente fórmula y criterios **al momento del pago de la obligación**:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

ÍNDICE FINAL correspondiente al **IPC** para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

ÍNDICE INICIAL correspondiente al **IPC** para vigente **a la fecha en que debió efectuarse el pago: 17 de mayo de 2013**

VALOR A INDEXAR: \$2.332.692

Al salir avante parcialmente el recurso de apelación y de conformidad con el artículo 365 del CGP, no se condenará en costas en esta instancia a la demandada.

5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de abril de 2015, pero con la siguientes **MODIFICACIONES** al numeral **SEGUNDO**:

- Se **REVOCA** la condena por concepto de INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO
- Se **ADICIONA**, porque al momento del pago de los **\$2.332.692** por concepto de **INDEMNIZACIÓN MORATORIA, TEXTRON S.A** reconocerá la INDEXACIÓN de ese valor de acuerdo con la siguiente fórmula y criterios

ÍNDICE FINAL x VALOR A INDEXAR – VALOR A INDEXAR = VALOR INDEXACIÓN
ÍNDICE INICIAL

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

ÍNDICE FINAL correspondiente al **IPC** para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

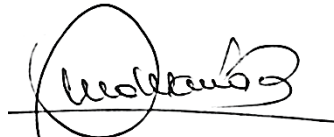
ÍNDICE INICIAL correspondiente al **IPC** para vigente **a la fecha en que debió efectuarse el pago: 17 de mayo de 2013**

VALOR A INDEXAR: \$2.332.692

SEGUNDO: En esta instancia no se causaron costas.

Lo anterior se notifica por EDICTO. Se firma en constancia por los que en ella intervinieron.

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



RADICADO: 050013105 – 002-2013-00629-02

SENTENCIA del //19/08/2022

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft**. Enlace en caso de no tener lector QR: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Eml7q8EuQUNMrZgNp2pwsc4BUdpCV26U8-CYhEjPX1kC9w?e=2csX5A